

VERDADES Y MENTIRAS DE LA SITUACION ECONOMICA QUE VIVE CHILE *

Compañeros trabajadores de todo el país:

Hace algunos días, desde una empresa del Area Social, situada en el Cordón Industrial Vicuña Mackenna, surgido como auténtica expresión de la voluntad y decisión revolucionaria de los trabajadores, me correspondió exponer los criterios centrales de nuestra colectividad sobre la coyuntura política que transitamos.

Ahora, como complemento de aquella exposición, entregamos al debate de los trabajadores, los planteamientos del Partido sobre la difícil situación económica que estamos viviendo, su estrecha dependencia de factores políticos y la forma revolucionaria de encararlos.

Esos planteamientos se hacen necesarios como respuesta del Partido Socialista a una prolongada y virulenta campaña de los reaccionarios. Campaña destinada a configurar la falsa imagen de un Gobierno Popular fracasado o incapaz de resolver, en una perspectiva revolucionaria, los obstáculos políticos y económicos que esos mismos sectores han creado.

Sabotaje, especulación, obstrucción parlamentaria, interferencia judicial, intromisión de la Contraloría, terrorismo y hasta el asesinato: todo lo han ensayado.

Su finalidad es obvia: crear artificialmente la imagen de una crisis política y económica que sólo tendría dos salidas. O el derrocamiento del Gobierno Popular, o la claudicación de su carácter revolucionario, transformándolo en simple instrumento del reformismo.

En parte, esa campaña ha tenido éxito. Importantes capas sociales han sido influidas. Hasta en ciertos sectores de la propia Unidad Popular se advierten posiciones conciliadoras, que facilitan la acción del enemigo.

* Discurso del Senador Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, pronunciado en la Industria "Cobre Cerrillos" y difundido por Cadena Nacional de Radioemisoras, tomado del suplemento de "Las Noticias de Última Hora", Santiago de Chile, 16 de agosto de 1973.

De ese modo, el Gobierno en su conjunto tiende a distanciarse de las masas, particularmente de la clase obrera, y los partidos populares ven debilitada su capacidad de conducción al no plantear, por una parte, alternativas claras de dirección, y por otra, al no acoger y desarrollar las iniciativas que van surgiendo desde el seno de las masas.

Sin embargo, no hay razón alguna para soslayar esa ofensiva ideológica reaccionaria. *Estamos enfrentando efectivamente problemas muy serios, que exigen urgentes respuestas. Pero esos problemas ni configuran una situación de crisis sin respuesta, ni significan el fracaso del Gobierno, ni mucho menos imponen la obligación de frenar el proceso de transformaciones revolucionarias.*

Hay que restablecer la realidad de los hechos, interpretarlos correctamente y, a partir de ello, proponer líneas concretas de acción.

NATURALEZA Y MAGNITUD DE LOS PROBLEMAS

La primera cuestión es evaluar la esencia y magnitud de los problemas en su proyección histórica.

El programa de la Unidad Popular, por su naturaleza anticapitalista y su objetivo central de iniciar una transformación socialista de nuestro país, no expresa proposiciones meramente circunstanciales.

En él se resume una larga trayectoria de luchas del pueblo chileno y una constatación reiterada de la incapacidad de cualquier forma de capitalismo, reformista o reaccionario, para abrir un futuro promisorio a las grandes mayorías nacionales.

Ni la administración reaccionaria de Alessandri, ni la reformista de Frei, lograron un crecimiento económico medianamente satisfactorio.

Bajo Alessandri, la economía chilena experimentó caídas violentas en 1958 y 1959, y un escuálido aumento en los años posteriores. Pero lo más grave lo constituye el hecho de que la participación de sueldos y salarios disminuyó de un 52% en 1960 a un 47% en 1964.

¿Por qué en esa oportunidad los reaccionarios no hablaron de crisis y nada dijeron de ese despojo a la clase trabajadora? ¿O es que las crisis económicas sólo existen cuando se hiere los intereses de la burguesía monopolítica?

Durante el gobierno de Frei, los resultados fueron igualmente pobres. Y a pesar de que esa administración contó, como nunca antes, con todos los factores favorables. Entre ellos, por ejemplo, una amplia mayoría parlamentaria que financió generosamente sus presupuestos; un apoyo irrestricto del capitalismo financiero internacional y, además, los precios más altos que —en términos reales— ha alcanzado el cobre en los mercados mundiales.

Así y todo, la economía en su conjunto creció en un 2.1% entre los años 1964 y 1967, y apenas un 1% entre 1967 y 1970, años en

que Frei abandona sus posiciones tibiamente reformistas y entra en abierta conciliación con lo más retrógrado de la reacción.

La burguesía habla hoy de “resultados catastróficos” en la industria y en la agricultura.

Pero parecen olvidar que en los cuatro últimos años del periodo de Frei, la industria creció en menos del 7%, y la agricultura, en menos del 8%. Aún más: en los años 1965 y 1969, la agricultura disminuyó en 2.4 y 9.2%, respectivamente. Y entonces no había sabotaje agrícola.

¿Por qué no hablaron de caos económico en esa oportunidad? ¿Por qué no hablaron de descalabro cuando en diciembre de 1970 la tasa de cesantía llegó a la increíble cifra de 8.3% de la fuerza de trabajo?

¿Por qué no hablaron de crisis cuando al término de la administración de Frei la deuda externa de Chile alcanzaba a la estratosférica suma de 4,000 millones de dólares?

Nada justificaba ese deterioro económico y financiero, salvo la incapacidad del capitalismo.

NUESTRO PUNTO DE PARTIDA

Con ese balance dramático debimos partir.

Una dura tarea nos aguardaba. Teníamos que comenzar por rescatar el cobre y otros recursos en manos del imperialismo. Teníamos que terminar con el latifundio. Teníamos que traspasar al Área Social y poner bajo el control de los trabajadores todas las actividades monopolíticas dominadas por la burguesía: producción industrial, distribución mayorista, bancos y otros sectores financieros.

Desde el inicio mismo teníamos que responder también a las necesidades urgentes de los asalariados, mejorar sus condiciones básicas de vida, garantizar su acceso al trabajo productivo.

No es poco lo que se ha hecho en sólo tres años. Tanto más, cuanto que el significado de los resultados inmediatos tenemos que apreciarlo bajo la perspectiva del cumplimiento de tareas de liberación, que abren paso a un esfuerzo constructivo de enormes proporciones.

Sólo ahora hemos recuperado el cobre, iniciando su industrialización libre de las imposiciones de los grandes consorcios norteamericanos. Sólo ahora estamos recuperando toda la potencialidad productiva de la tierra chilena, estrangulada hasta ayer por la irracionalidad de un latifundismo arcaico. Sólo ahora comienza a concretarse la posibilidad de un nuevo tipo de desarrollo industrial, conducido por los propios trabajadores, al servicio de Chile y de la gran mayoría de los chilenos.

Todo eso no ha sido fácil. Sólo un ingenuo habría creído que estos cambios revolucionarios podrían comenzar a realizarse sin

que surgieran graves problemas coyunturales, algunos derivados del proceso mismo y otros —los más— creados y agudizados por los enemigos de clase.

La presencia de estos problemas constituye el precio insoslayable que hace posible ir rompiendo los mecanismos de subdesarrollo capitalista. La irracionalidad y la anarquía del sistema capitalista deben ser reemplazadas por una conducción planificada de la economía. Los empresarios extranjeros del cobre, el hierro y el salitre, son sustituidos por trabajadores y técnicos chilenos. Los campesinos asumen el control de la tierra. Obreros y nuevos cuadros funcionarios desplazan a los antiguos gerentes. En lugar de múltiples empresas productoras administradas bajo las leyes de la explotación burguesa y de la ganancia máxima de sus propietarios, comienza a surgir un Area Social llamada a cumplir otros objetivos y a desarrollar distintas relaciones de producción.

UNA GRAN LEY HISTORICA

En suma, se va cumpliendo una gran ley histórica: una clase social caduca y en decadencia va siendo suplantada por otra nueva y vigorosa, en la dirección y conducción de la economía y de la sociedad.

Pero lo anterior supone un duro periodo de aprendizaje, plagado de errores y debilidades, que inevitablemente ocasiona problemas inmediatos.

De allí emanan algunos de los que hoy enfrentamos.

Sin embargo, los más serios obstáculos nacen de la acción deliberada de los enemigos de este proceso, estimulados al mismo tiempo —aunque parezca paradójico— por los extraordinarios avances en la realización del Programa de la Unidad Popular, pero también, por las insuficiencias en su ejecución.

Por los avances, porque han afectado profundamente los intereses de la burguesía y el imperialismo.

Por las insuficiencias, porque le han permitido a una burguesía parasitaria retener importantes bases de sustentación económica, como resultado de no haberse completado aún el Area Social, y por la capacidad de los sectores empresariales, para trasladar sus fuentes de ingresos hacia el capitalismo especulativo.

Desde estas nuevas posiciones, se esfuerzan por provocar el caos en la economía, con la complicidad del Parlamento y del Poder Judicial, y además, pueden financiar generosamente su campaña ideológica, sus acciones sediciosas y su apoyo al terrorismo fascista.

Allí está la verdadera raíz de los problemas que sufren Chile y su pueblo. Allí están las verdaderas razones del desborde inflacionario, de los graves desequilibrios financieros, que los reaccionarios pretenden descargar sobre el Gobierno y los trabajadores.

A PESAR DE TODO, HAY AVANCES IMPORTANTES

Pese a sus múltiples y variados esfuerzos, la acción de la burguesía y el imperialismo no ha podido impedir avances importantes en la producción, en la ocupación de mano de obra y en el consumo de las masas. Avances que no se pueden medir solamente en porcentajes más o porcentajes menos, sino fundamentalmente en función de su significado histórico.

Pero en cualquier forma, resulta burdamente falsa la imagen catastrófica que la reacción pretende dar sobre la producción.

En este terreno, no sólo hemos avanzado, sino que se han logrado incluso expansiones apreciables, cuya magnitud conviene registrar aunque sólo sea para restablecer la realidad de los hechos.

Veamos algunos resultados concretos.

En los dos primeros años del Gobierno Popular, la producción del total de bienes y servicios creció en algo más que un 12%, mientras que durante los tres últimos años del gobierno de Frei aumentó en sólo 10%.

La conclusión es elocuente: hemos hecho más en dos años y medio que cualquier Gobierno anterior. Y ese crecimiento tiene lugar en medio de transformaciones profundas e irreversibles en las viejas estructuras institucionales, y de una decisiva ruptura en el andamiaje del anquilosado sistema capitalista.

Dentro de lo anterior, queremos destacar un hecho de extraordinaria importancia: la expansión del sector industrial.

En el transcurso de los dos primeros años del Gobierno Popular, la industria creció en casi 17%, es decir, cerca del triple de lo que logró realizar el Gobierno anterior.

Otro ejemplo: la producción agrícola. Los reaccionarios hablan de un “descalabro agrícola”. Comparemos. En los dos primeros años de nuestro Gobierno, la agricultura creció en un 6%, mientras que la administración freista alcanzó un 8% en sus tres años finales. Pero con una diferencia cualitativa fundamental: nuestra expansión se realizó en los marcos de una reforma agraria efectiva y revolucionaria y no en una simulación de cambio en la tenencia de la tierra.

Otro resultado: la disminución de la cesantía. Los reaccionarios ya no la mencionan. Por lo demás, nunca se preocuparon de ella, a diferencia nuestra que la consideramos un imperativo revolucionario. La administración pasada dejó la tasa de desocupación en cifras altísimas: sobre un 8% a fines de 1970. Pues bien, en sólo dos años de Gobierno Popular, la cesantía fue reducida a sólo un 3%, el porcentaje más bajo en la historia contemporánea de Chile.

Podemos extender las comparaciones, incluso a la alimentación y a la disponibilidad de productos esenciales. Este tema preocupa mucho a la publicidad reaccionaria, que distorsiona u oculta la verdad,

con fines demagógicos. Las razones, son obvias: también salen perdiendo.

Sólo mencionaremos algunos ejemplos:

Disponibilidad de alimentos por habitante al año

	Promedio		
	1965/70	1972	
— Trigo	156	178	Kilos
— Arroz	11	12	Kilos
— Porotos (frijol)	5	6	Kilos
— Papas	56	62	Kilos
— Azúcar	37	40	Kilos
— Aceite	6	8	litros
— Carnes	34	43	Kilos
— Huevos	142	57	unidades
— Leche	113	75	litros

Esa es la realidad objetiva. Aunque debemos reconocer que nuestros esfuerzos han sido insuficientes para que estas mayores disponibilidades alimenticias lleguen efectivamente a los trabajadores, a los campesinos, a las mujeres pobladoras, y no se transformen —como ocurre lamentablemente— en un aumento excesivo del consumo de los ricos.

NUESTRA MAYOR DEBILIDAD: LOS MECANISMOS FINANCIEROS

Esa expansión real de la producción, esa mayor disponibilidad de productos, esa notable disminución de la cesantía, ha sido posible a pesar de la pertinaz acción sediciosa, el sabotaje, la obstrucción parlamentarista, y los paros patronales.

Sin embargo, los empresarios han tenido éxito en la provocación de una verdadera crisis financiera.

Los déficit son enormes en el sector fiscal y en el conjunto de las empresas del Area Social. Por lo tanto, es también muy grande la expansión monetaria, la emisión de billetes y el endeudamiento público con el Banco Central. A su vez, esa expansión monetaria constituye un factor explosivo de incalculables efectos en el proceso inflacionario. Y ese aumento de dinero circulante sirve de apoyo a una gigantesca campaña de especulación, de mercado negro, de acaparamiento, que acelera aún más el fenómeno inflacionista.

En este terreno está nuestra mayor debilidad para una conducción correcta de la economía: la insuficiencia de mecanismos financieros

y legales que permitan combatir el capitalismo especulativo y enfrentar el sabotaje reaccionario.

Una vez más queda al desnudo la demagogia derechista. Sus medios propagandísticos pretenden atribuir esos fenómenos inflacionarios a una supuesta incapacidad del Gobierno; culpan de los déficit financieros a una presunta anarquía de las empresas del Area Social; imputan el mercado negro a supuestas actividades especulativas de los propios trabajadores.

Esa falsa imagen obliga a restablecer la verdad de algunos hechos.

En primer lugar, establecer que la burguesía en su conjunto dispone hoy de ingresos altísimos. Posee más dinero que nunca. No se necesitan cifras para demostrarlo. Los más caros restaurantes y los sitios de diversión más lujosos están permanentemente llenos. Pagan cualquier precio y al contado por artículos de lujo, casas, automóviles y alimentos que escasean. El comercio ilegal de dólares alcanza niveles colosales.

¿Cómo se explica, entonces, que una burguesía que se queja amargamente de haber perdido fondos, fábricas y bancos, disponga de ese gigantesco volumen financiero? Muy simple: han compensado —con exceso—, lo que han dejado de ganar como “productores” para obtenerlo ahora como “especuladores”.

UNA BURGUESIA PARASITA

Y ésta es otra realidad concreta de nuestro tiempo. De capitalistas parcialmente productivos se han transformado en capitalistas esencialmente especulativos.

Con tan elevados ingresos, esta burguesía parásita compra todo lo que está a su alcance, por supuesto, mucho más allá de sus necesidades. Y multiplica ese dinero acaparando, revendiendo y anarquizando todo el sistema de distribución.

En segundo lugar, hay que establecer claramente que esa misma burguesía, a través de su representación parlamentaria, es la responsable directa de los gigantesco déficit financieros. El Congreso Nacional se ha opuesto sistemáticamente a todo financiamiento de los programas de vivienda, salud, educación, y otros que interesan a la gran mayoría de los chilenos. También han despachado desfinanciadas las leyes de reajustes de sueldos y salarios.

En el conjunto de leyes aprobadas por el Congreso, entre los años 1972 y 1973, la mayoría parlamentaria ha otorgado, en promedio, sólo un 20% del gasto que éstas generaron. Esto quiere decir que por cada 100 escudos de gasto, el Congreso sólo aprobó financiamiento por 20 escudos. Los 80 restantes debieron cubrirse con emisiones de dinero.

Servicios completos —como la CORFO—, fueron dejados sin presupuesto. La última ley de reajustes sólo fue financiada en un 15%.

Esto obligó al Gobierno a solventar con emisiones de dinero los recursos que el Parlamento le ha negado.

Así se aviva la hoguera de la inflación. Y después culpan irresponsablemente al Gobierno y a los trabajadores.

EL PROBLEMA DE LA INFLACION

La inflación es un problema muy serio. Es quizás el único problema realmente más grave que enfrenta la economía chilena. Una cuota de ella, es cierto, es responsabilidad nuestra, pero la mayor parte —insistimos— corresponde a la terca e insensata negativa del Parlamento a otorgar los recursos requeridos por el Gobierno.

Por tal razón, es imprescindible elaborar una estrategia antinflacionaria que prescindiera de la obstrucción parlamentaria. El fenómeno inflacionista está distorsionando gravemente el proceso económico en su conjunto. Incluso desfigura la imagen de incrementos sustanciales que hemos alcanzado en diversos rubros económicos. La propia imagen global del proceso se oscurece bajo la apariencia de caos y anarquía que proyecta la inflación.

Una estrategia inflacionaria, sin embargo, no podrá alcanzar resultados efectivos mientras no se sustraigan ingentes recursos de la burguesía y se impongan severas medidas financieras.

Esa es una premisa fundamental.

En alguna medida, las demandas excesivas de reajustes agudizan el proceso inflacionario.

Estamos seguros de la disposición de los trabajadores a discutir y replantear este problema, e incluso a asumir los sacrificios que fueran necesarios.

Sin embargo, esa disposición de los trabajadores exige condiciones justas. Exige que se realice en los marcos de una política que asegure, en primer lugar que serán afectados drásticamente los inmensos ingresos de la burguesía.

En segundo lugar, exige que se asegure que los resultados de su esfuerzo productivo no seguirán alimentando a toda una cadena de especuladores.

LOS TRABAJADORES CONSTRUYEN, LA BURGUESÍA DESTRUYE

En tercer lugar, exige que se asegure, de una vez por todas, que se implantará un sistema de racionamiento que les garantice un abastecimiento normal de productos esenciales y a precios oficiales.

Sólo bajo esas condiciones, los trabajadores están dispuestos a mayores esfuerzos y sacrificios.

Al respecto, tenemos que reconocer que no siempre el Gobierno ha utilizado con energía y audacia los instrumentos legales que dispone

para captar ingresos de los sectores acaudalados. Se han congelado precios de bienes producidos por el Área Social que favorecen el consumo de los ricos, como consecuencia de no haberse establecido una política discriminatoria de precios, y un racionamiento en la distribución de los productos esenciales.

En los últimos tres años hemos presenciado, por una parte, cómo construyen los trabajadores, y por la otra, cómo destruye la burguesía,

Esta burguesía, que ha sido cómplice e instrumento de todas las maniobras agresoras del imperialismo: la supresión de los créditos externos, el boicot a las empresas de repuestos y bienes esenciales, el embargo de nuestras ventas de cobre, la internación de agentes y armas destinados al terrorismo y a la sedición.

Esta burguesía, que ha desmantelado industrias; que ha dejado al país sin stocks de materias primas y repuestos; que ha descuidado conscientemente el mantenimiento de los equipos; que ha convertido el capital de operación en dólares comprados en el mercado negro.

Esta burguesía, que ha fomentado el éxodo de técnicos y profesionales; que impulsa la fuga de capitales hacia el exterior; que invierte en empresas en el extranjero y reside en un lujoso exilio.

Esta burguesía, que ha dejado de cultivar sus fundos y morir de hambre al ganado; que desahucia campesinos e intimida a los pequeños agricultores.

Esta burguesía, que, con recursos adicionales suministrados por la CIA y por una potencia extranjera, articuló el paro patronal de octubre, el cual arrojó pérdidas por más de 200 millones de dólares, agravó los problemas de abastecimiento, y retrasó en muchos meses los planes de producción y los programas de inversiones.

Esta burguesía que, a través de la insignificante figura de un ex-Ministro de Hacienda, anda especulando, por cuenta de la CIA, con la idea de un supuesto cambio de moneda para el fin de desatar nuevamente el pánico financiero.

Esta burguesía que, ahora, mueve de nuevo sus peones, a sus Vilarines, desencadenando otro paro empresarial como en octubre, con gigantescas pérdidas humanas y materiales.

Esta burguesía, en fin, que ha llevado a sus extremos más agudos una escalada de terrorismo sin precedentes, terrorismo que va desde el atentado dinamitero y los ataques a mansalva hasta el crimen político, como fue el caso del Edecán del Presidente de la República, Comandante Arturo Araya.

¿Cuál es el costo social de esta enloquecida campaña de la burguesía y el imperialismo? En vidas humanas, es inconmensurable. En pérdidas materiales, su costo es incalculable.

Las clases adineradas y sus mercenarios han declarado la guerra a Chile y su pueblo en lo social, lo económico y lo político. Y lo han intentado, también —como el 29 de junio— en lo militar.

Igual como en 1818, han desplegado las banderas negras de la

“guerra a muerte”; han implementado una política de “tierra arrasada”.

LA RESPUESTA DEL PUEBLO

¡Qué enormes esfuerzos han tenido que desplegar los trabajadores para contrarrestar esa conducta criminal y destructiva de la burguesía! No ha existido ningún llamado a cumplir tareas que no dejaran de asumir con decisión y capacidad. Allí donde se obstaculizaba la importación de repuestos, surgieron miles de iniciativas para hacerlos. Allí donde el cerco imperialista limitaba la compra de materias primas, se multiplicaron las ideas para economizarlas o sustituirlas por otras. En todos los ámbitos del Area Social surgió un movimiento nacional de innovadores, a través del cual obreros y técnicos han ideado nuevos procedimientos productivos.

En una palabra, ya comienzan a madurar los Héroes del Trabajo, imposible de suponerlos en empresas regidas por el capitalismo.

Contrastan esas realizaciones con la imagen distorsionada que difunde la propaganda reaccionaria sobre el Area Social.

Esto es explicable. Lo que más duele a la burguesía es la constitución y desarrollo del Area Social. Cada fábrica estatizada es una fuente menos de sustentación económica de la burguesía, y un instrumento más en el fortalecimiento del Poder Popular y en la construcción del socialismo.

Por eso, el Partido Socialista ha defendido sin concesiones el cumplimiento absoluto del Programa Básico del Gobierno Popular.

Por eso, el Partido Socialista ha sostenido invariablemente que cada vez que la burguesía intente uno de sus paros patronales o una de sus aventuras golpistas, nuevas industrias sean ocupadas por los trabajadores. Y no sólo ocupadas, sino que ninguna de ellas sea devuelta a sus propietarios sediciosos, salvo que los propios trabajadores así lo decidan.

Toda la maraña de mentiras que teje la reacción contra el Area Social se desbarata cuando se enfrenta a los resultados alcanzados por el esfuerzo de los obreros.

Concretamente, en todos los sectores donde más ha avanzado el Area Social, las cifras de producción industrial de hoy son apreciablemente mayores que las de 1970.

Vamos a destacar algunas cifras comparativas que corroboran estas afirmaciones.

AREA SOCIAL: VIVERO DE PODER POPULAR

La prensa reaccionaria no puede tergiversar la realidad de estas cifras ni menos desmentirlas, pese a los fraudulentos informes de la Sociedad de Fomento Fabril. Por eso prefiere ocultarlas y centrar

su campaña en los resultados financieros de las empresas del Area Social.

Es efectivo que hay déficit de gran magnitud. Pero un enfoque honesto implica apreciarlo en su verdadero origen y en su justo significado.

En parte, provienen de la política de defender el ingreso real de los trabajadores mediante la mantención de los precios de los artículos esenciales. Política que, por lo demás, carece de sentido si no se establece algún sistema de racionamiento.

Por otra parte, corresponden a empresas cuyas administraciones anteriores jamás pudieron financiar y que fueron arrastradas a extremos dramáticos, como es el caso de los Ferrocarriles del Estado o de las empresas portuarias.

Aún en tales condiciones, hay importantes sectores del Area Social que están generando excedentes.

Irrita en particular a la burguesía el hecho de que el Area Social sea precisamente el vivero donde vienen gestándose las características que marcarán indeleblemente las transformaciones socialistas de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Es aquí donde han nacido nuevas formas de organización y poder de la clase obrera, como son los Cordones Industriales.

Es aquí donde se avanza en la profundización de los sistemas de control y participación de los trabajadores en la dirección y administración de las empresas.

Es aquí donde se han abierto nuevos canales para el acceso de los obreros a beneficios que antes la burguesía les negó: la cultura, el arte, la recreación, el deporte, la atención a sus hijos, lo cual los trabajadores aprecian y valorizan tanto o más que cualquier conquista economicista.

UNA AUTOCRITICA NECESARIA

Frente a la conducta y el esfuerzo de los trabajadores, reconocemos francamente —y nos hacemos cargo de ello con sentido autocrítico y en lo que nos corresponda— que no ha estado a esa misma altura la acción del Gobierno y de los partidos, en lo que se refiere a la dirección económica y el manejo del aparato estatal.

En ese espíritu, reiteramos nuestro criterio sobre la necesidad urgente y esencial de completar el Area Social para enfrentar con éxito las campañas de sabotaje económico.

Reiteramos que no se están utilizando plenamente los instrumentos legales que el Gobierno dispone para impulsar una dirección económica que abra caminos efectivos para solucionar los problemas.

Reiteramos que no se ha planteado a los trabajadores un esquema definido de política económica, que ubique cada problema particular en un cuadro de conjunto y dentro de una perspectiva revolucionaria.

Reiteramos que existen falsos temores para plantear medidas que afecten ingresos ilegítimos de la burguesía.

Reiteramos que hay impunidad frente a muchas acciones que constituyen delitos económicos.

Reiteramos que existe una especie de resignación fatalista frente al permanente bloqueo parlamentario.

Reiteramos que hay falta de audacia para reestructurar un aparato estatal que la burguesía creó en función de sus intereses de clase y que hoy es incapaz de responder a los nuevos requerimientos.

Reiteramos que persiste una tendencia nociva a actuar sólo en la superestructura, en lugar de apoyarse en las masas y estimular su movilización activa para la solución directa de muchos problemas.

Reiteramos que la rutina y el burocratismo siguen gravitando sobre la maquinaria administrativa, frenando iniciativas que surgen desde los trabajadores o frustrando aspiraciones que pueden movilizar el esfuerzo y la capacidad existente en las diferentes regiones del país.

Reiteramos que no hemos aplicado toda nuestra firme voluntad para poner término al cuoteo partidista, sustituir a los funcionarios sin suficiente idoneidad, censurar la desidia, erradicar el espontaneísmo, castigar la irresponsabilidad, y penar sin contemplaciones los actos deshonestos.

LA UNICA SALIDA: PROFUNDIZAR EL PROCESO

Así entendemos la naturaleza de los problemas que enfrentamos, su verdadero origen y los que tienen sus causas en la acción del enemigo y en nuestras propias debilidades.

A partir de esa evaluación, y consciente de la gravedad de los problemas, reiteramos nuestra convicción de que cualquier salida política o económica sólo podrá prosperar en los marcos de una profundización orgánica y racional del proceso.

Nadie, con un mínimo de sensatez, puede pensar en la posibilidad de un retorno a las condiciones que prevalecían antes del inicio del Gobierno Popular.

Tampoco son valederas las soluciones mediatizadas que impliquen detener las transformaciones. Los problemas que enfrentamos en esta etapa son, ante todo, expresión de la lucha social, de una aguda lucha de clases, en la cual la burguesía no va a transar a menos que aceptemos la capitulación.

Cualquier salida positiva a los problemas económicos, cualquier diseño de política económica, difícilmente podrá tener éxito si previamente no completamos el Area Social y no destruimos la capacidad de control económico y financiero que aún mantiene el capitalismo.

Completar rápidamente el Area Social significa privar a la oligarquía de sus principales fuentes de ingresos financieros, debilitar su

capacidad de obstrucción económica, e imposibilitar en gran medida el mantenimiento del mercado negro.

Esa ampliación necesaria del Area Social es también un requisito para que ésta se convierta efectivamente en el sector dominante de la economía, condición a su vez para atender eficazmente los problemas de conducción económica.

Ese carácter dominante no hay que entenderlo como una especie de "competencia" entre las áreas Social y Privada. De lo que se trata es que, desde ahora, el Area Social se convierta en un instrumento de la política económica del Gobierno. Un instrumento que permita imponer los términos de funcionamiento del Area Privada mediante el suministro condicionado de materias primas, la absorción de sus productos, e incluso a través del establecimiento de estancos o cuotas obligatorias de distribución estatal, de convenios de producción, suministros e inversiones.

Sólo así adquiere sentido una política de producción, de asignación de recursos, de importaciones y de precios. Sin ello, en cambio, resulta impracticable —incluso— una política de distribución, como lo demuestran los propios hechos.

Conviene señalar, de paso, que esa perspectiva es compatible con los intereses de amplias capas de pequeños empresarios. Ellos se han visto parcialmente liberados de la anterior explotación de que eran víctimas por los grandes monopolistas. Pero en alguna medida siguen siéndolo hoy por parte de especuladores sin perjuicio de que ellos mismos, también, procuren, dadas las condiciones del mercado, transformarse en especuladores de segundo orden.

En cualquier caso, el principal problema de los pequeños empresarios es obtener los suministros adecuados. Por lo tanto, están abiertos a cualquier esquema que les asegure las materias primas y recursos necesarios destinados a sostener o ampliar sus niveles de producción.

De allí entonces que las "reglas del juego" más importantes para ese sector no se dan solamente a través de garantizar el derecho de propiedad, sino también por los términos de relación con el Area Social que les asegure la continuidad de su actividad productiva.

COMO SUPERAR LAS DIFICULTADES

Cuando sostenemos que no hay salida, sino en el marco de una profundización orgánica y racional del proceso, no estamos señalando solamente una conclusión general correcta, pero desprovista de contenido concreto.

A partir de esa conclusión —y con el compromiso político que ella implica— afirmamos estar también en condiciones de poner en marcha un conjunto de medidas destinadas a encarar y superar las dificultades económicas.

No es el caso de enumerarlas en forma completa y detallada. Sólo

queremos enunciar aquellas que nos parecen esenciales, porque apuntan a problemas urgentes.

1.—*El problema del desabastecimiento.* Digámoslo derechamente: somos partidarios de establecer rápidamente un sistema de racionamiento. En este sentido, las organizaciones de masas ya se han adelantado a la decisión administrativa, adoptando y experimentando diversas formas de distribución de muchos productos. Hacen verdaderos censos en barrios y poblaciones, controlan a los comerciantes y constituyen Juntas de Abastecimiento y Precios, Almacenes Populares y Comandos de Abastecimiento Directo.

Es hora de que el aparato administrativo responda y se comprometa con esas iniciativas, sobre la base de la experiencia que ha venido recogiendo la Secretaría Nacional de Distribución.

Somos partidarios de un sistema flexible, capaz de aprovechar distintos canales del comercio privado, de cooperativas y otras formas de distribución que den una especial prioridad a la atención de las necesidades de los trabajadores, y que se apoyen en la capacidad organizativa de las masas.

Sólo el control social de la distribución, al liquidar la especulación, le da sentido y contenido al Área Social. Y, a su vez, hace posible que la producción generada por ese sector llegue directamente a sus beneficiarios.

2.—*La inflación.*—Sostenemos que una decidida política antinflacionaria pasa por el control y captación de los excesivos recursos monetarios que continúa percibiendo la burguesía. Ella implica poner fin a la evasión tributaria que desarrollan algunos sectores, incluso como respuesta a los llamados a la “resistencia civil”, parte de la campaña sediciosa de la reacción.

Eso justifica plenamente una severa acción de control, complementando los mecanismos administrativos con el apoyo voluntario de profesionales e instituciones universitarias que refuerzan la capacidad de revisión contable y de auditoría. Esa evasión se da también, en alguna medida, en las declaraciones de impuesto a la renta y en la fraudulenta mantención de suntuosas mansiones que aparecen favorecidas por el DFL - 2.

Son igualmente muy altas las deudas que mantienen propietarios y empresarios con diversos organismos públicos: impuestos internos, instituciones de previsión, sistema bancario, y organismos de fomento.

Proponemos que se dicte una severa instrucción presidencial que obligue a los responsables de esos organismos a exigir sin contemplaciones la inmediata regularización de toda deuda morosa.

Frente al hecho de que los precios efectivos a que se están transando las viviendas de lujo equivalen a muchas veces el valor de sus avalúos, proponemos una revalorización de ese tipo de bienes raíces. Eso significará un aumento inmediato de las contribuciones que deberán pagar los sectores adinerados.

3.—*Política de precios.*—Proponemos que se establezca una fuerte discriminación de precios para aquellos productos accesibles a quienes siguen disfrutando de ingresos extremadamente altos.

4.—*Control de la especulación.*—Como medidas adicionales de control que limiten la capacidad especulativa y la obstrucción económica de la burguesía, proponemos que se implante una declaración obligatoria de activos y stocks de materias primas, productos terminados y existencias. Con igual propósito, consideramos urgente la estatización de las Compañías de Seguros, así como la transformación de las Notarías en un servicio público.

5.—*Sector agropecuario.*—En el sector agropecuario proponemos, entre otras, las siguientes medidas inmediatas:

a) Expropiación rápida de alrededor de 2,000 predios con superficies entre 40 y 80 hectáreas de riego básico, actualmente abandonados por sus dueños.

b) Suscripción de convenios de producción con los restantes predios que les garanticen las condiciones necesarias y aseguren su contribución al aumento de la producción agrícola.

c) Fortalecer el trabajo conjunto y las medidas de estímulo con las cooperativas y campesinos en predios menores de 40 hás. de riego básico.

d) En el interior del sector expropiado, concentrar especialmente los esfuerzos técnicos y materiales en los 96 Centros de Producción que, incluidas las tierras de Magallanes, suman más de un millón de hectáreas.

e) Expropiación de los 15 grandes molinos, como forma de control efectivo de una alta proporción de cereales que son procesados por ellos.

f) Reforzar y estimular la recolección de cosechas a través de la Empresa de Comercio Agrícola y otros mecanismos estatales, método esencial para combatir la especulación y ordenar la distribución.

6.—*La producción industrial.*—Obviamente la producción de cobre debe concentrar aún más la preocupación de la dirección política y económica, a través de un conjunto de medidas que es urgente precisar.

En la industria en general, es imperioso adoptar medidas que aseguren la disponibilidad suficiente de repuestos y materias primas. Pensamos que es necesario concentrar esfuerzos en sectores que vienen constituyendo verdaderos “cuellos de botella” para la expansión económica. Es el caso, entre otros, del transporte y sus repuestos, la energía y los materiales de construcción.

NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Los publicistas de la reacción han logrado algún éxito en difundir la falsa imagen de una paralización de las inversiones públicas.

No tiene autoridad moral para criticar una burguesía históricamente incapaz de sostener un proceso mínimo de acumulación, hecho que caracteriza a Chile, desde hace muchas décadas, como uno de los países con las tasas más bajas de inversión.

Y esa burguesía parasitaria, sin más patria que el mundo de sus negocios, es la que acusa al Gobierno Popular de no realizar inversiones.

Lo cierto es que, no obstante las grandes dificultades inmediatas, se está llevando a cabo un serio esfuerzo de inversión.

Las importaciones de maquinaria agrícola han significado aumentar en más del 50% el parque total de tractores existentes al inicio del Gobierno, y fortalecer la dotación de tractores pesados, cosechadoras y otros equipos para la agricultura.

Al mismo tiempo, está en curso un número apreciable de proyectos para la conservación y transformación de productos agrícolas, incluidos silos para cereales, bodegas de guarda para papas, centros de crianza de terneros, nuevas instalaciones para una red nacional de frigoríficos.

Tales proyectos conjugan los intereses nacionales con las perspectivas de desarrollo de las diversas regiones del país.

Algunos alcanzan dimensiones excepcionales, aún a nivel mundial, como es el caso del Complejo Avícola de Longovilo, en construcción, destinado a producir más de 10 millones de pollos *broiler* al año.

En el sector pesquero, se incluyen obras como el nuevo puerto pesquero de Colcura, los avances ya logrados en el cultivo artificial de mariscos en Chiloé y la zona norte, y los terminales y centros de acopio pesquero que se habilitan a lo largo del país.

La expansión de la producción y del comercio exterior han hecho insuficientes las capacidades portuarias, descuidadas desde mucho tiempo. A ello se está respondiendo, entre otras iniciativas, con la transformación de San Antonio en un gran puerto de granos, el muelle de Maguellín próximo a terminarse, y la adaptación del puerto de Ventanas para la descarga de graneles.

En el campo de la energía, figuran nuevas perforaciones de ENAP en Magallanes, la ampliación de la planta de Concón y el proyecto de gas natural licuado de ese mismo organismo.

Igualmente, está el caso de la ampliación de la planta termoeléctrica de Ventanas, y la próxima terminación de la central hidroeléctrica El Toro.

Los programas de inversión que se están materializando en la siderúrgica de Huachipato, permitirán duplicar la producción de acero para fines de 1975, sobrepasando el millón de toneladas como primera etapa de un programa de 4 millones de toneladas de laminados por año.

Las obras adelantadas en la planta de INACESA, en Antofagasta, aumentarán apreciablemente la capacidad productiva de cemento,

complementada con otra planta en el sur, y los mejoramientos de las fábricas ya existentes.

Además de los programas en siderurgia y cemento y del amplio conjunto de proyectos agroindustriales, incluida la próxima terminación de la planta IANSA en Curicó, se adelanta una serie de otros proyectos de industrialización. Entre otros, en manufacturas de cobre, ácido sulfúrico, fertilizantes, celulosa, aceites lubricantes, construcción de maquinaria agrícola, partes y equipos automotrices, materiales de construcción.

Simultáneamente, se está atendiendo a la renovación y modernización del equipamiento industrial, principalmente en las empresas del Area Social. Ahora mismo, los trabajadores de este sector están iniciando la discusión en la base del Plan de Inversiones para 1974, al calor de su iniciativa y su experiencia.

A la realización del amplio programa de inversiones, cuyo contenido apenas hemos reseñado, está contribuyendo la cooperación económica y técnica de muchos países, principalmente del mundo socialista.

Esto ha permitido movilizar decenas de millones de dólares como componente importado de esos proyectos, y asegurarnos nuevas vinculaciones tecnológicas que no imponen, como en el pasado, condiciones de dependencia y subordinación a intereses imperialistas.

La concreción de estas realizaciones no excluye la adopción de medidas inmediatas para problemas tan agudos como la movilización colectiva y la vivienda.

Frente a este último, estimamos dar prioridad a los problemas de agua potable, alcantarillado y electricidad; a la creación de Consejos Comunales de Programación y de Empresas Estatales de la Construcción, incluidas empresas regionales y otras especializadas en este campo.

Sin perjuicio de lo anterior, proponemos el establecimiento inmediato de mecanismos eficaces destinados a hacer cumplir la Ley de Arriendo, así como modalidades que permitan a los arrendatarios optar con preferencia a la compra del inmueble alquilado.

Proponemos igualmente la expropiación de los inmuebles no utilizados para dedicarlos al mejoramiento rápido de los servicios sociales o a la vivienda. Proponemos la expropiación de propiedades urbanas constituidas en *cités* o conventillos, la habilitación de las viviendas recuperables, su entrega en arriendo justo a grupos organizados, sindicatos o cooperativas, y su remodelación a futuro.

UTILIZAR TODAS LAS FACULTADES

Medidas como las señaladas, deberán acompañarse de la más firme decisión de utilizar plenamente todas las facultades de que dispone el Gobierno para enfrentar los problemas económicos.

Sintiéndose amparados por la impunidad de sus delitos, proli-

feran los delincuentes económicos. Un proyecto de Delito Económico que presentó el Gobierno, fue sugestivamente rechazado por la mayoría reaccionaria del Parlamento.

No obstante, en medio de la maraña legal que fue tejiendo la burguesía, existe disperso un número apreciable de disposiciones vigentes que entregan una capacidad de control y represión muy superior a la que se está utilizando efectivamente contra los delincuentes económicos.

Al respecto, proponemos la dictación de un Decreto Supremo que reúna y ordene ese conjunto de facultades ya existentes, y que instruya a todos los funcionarios públicos aplicarlas estrictamente en los campos de su respectiva competencia. Además que el propio Gobierno al más alto nivel designe una Comisión Asesora, que asegure el cumplimiento cabal de dichas disposiciones.

Hemos señalado reiteradamente en otras oportunidades la conveniencia de una Ley especial sobre Probidad Administrativa. Un proyecto que impulsamos, duerme en los archivos del Parlamento.

Es sabido que en el interior del propio aparato estatal, la burguesía dispone de elementos que defienden sus intereses, en perjuicio del interés nacional y de la política general del Gobierno. "Filtraciones" de informaciones reservadas, gestiones indebidas de decisiones que favorecen intereses particulares, el retraso interesado de trámites, son algunas de tantas manifestaciones que caracterizan la conducta conocida como "atornillar al revés".

Se producen también actos ilícitos o de franca deshonestidad y corrupción, que no siempre se castigan debida y oportunamente.

Por tal razón, proponemos que se reúnan en otro Decreto Supremo todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias vigentes que controlan la conducta del funcionario público en el ejercicio de sus labores. A ellos podrán agregarse aquellas normas cuya dictación compete al Poder Ejecutivo y que tengan el mismo propósito.

Creemos indispensable crear una Comisión Permanente, integrada por personas intachables y con facultades ejecutivas, que reciba todas las denuncias relativas a actos de incorrección y deshonestidad, se pronuncie si hay o no fundamento, y resuelva su trámite correspondiente.

REVISAR MECANISMOS DE DIRECCION ECONOMICA

No obstante, no basta una correcta conducta funcionaria para que marche debidamente un organismo administrativo lleno de vicios heredados. Por ello, proponemos una revisión amplia de los mecanismos de dirección económica y de la estructura del aparato estatal, así como una reevaluación de las responsabilidades personales en los principales niveles administrativos.

Apoyamos firmemente las tareas de planificación que estén ade-

lantándose para 1974, y señalamos la necesidad de que en su elaboración definitiva tengan una participación efectiva los trabajadores y las organizaciones de masas.

Además, proponemos un fortalecimiento del Comité Económico de Ministros, y una redefinición de las responsabilidades de los ministerios.

Con ese mismo espíritu, proponemos delimitar con precisión la dependencia institucional de sectores y actividades importantes en los cuales se registran ambigüedades que acentúan el burocratismo y diluyen las responsabilidades.

Para fortalecer la capacidad administrativa y las facultades de decisión a nivel de provincias o agrupación de ellos, proponemos transformar a los intendentes en verdaderos jefes de gabinetes regionales, con la incorporación de representantes directos de los ministerios fundamentales en calidad de viceministros.

Proponemos igualmente una acción decisiva para trasladar masivamente a provincias, profesionales y técnicos de diferentes especialidades que hoy día se frustran en tareas burocráticas en Santiago.

En un cuadro de esa naturaleza, anticipamos la plena disposición de Partido Socialista a que se haga una revisión completa de la asignación de responsabilidades personales, desde los niveles superiores a los cuadros intermedios. Ponemos desde ya a disposición de las decisiones del Gobierno y los trabajadores los cargos de interventores y administradores de las empresas del Area Social.

URGE LA CAPACITACION DE TRABAJADORES

Es parte de la esencia del proceso revolucionario chileno que los trabajadores sean los que vayan asumiendo el control y dirección de la actividad económica. Y no sólo en cada unidad productiva, sino también en los niveles intermedios y superiores.

No obstante, ese objetivo del proceso se estrella con el problema concreto de que la burguesía siempre se cuidó de limitar el acceso de las masas trabajadoras a la educación general y a la formación técnica. De ahí la ausencia o escasez de cuadros obreros en esos niveles de decisión.

Por eso, sostenemos que hay que emprender urgentemente un extenso programa nacional de capacitación de trabajadores y formación de nuevos cuadros directivos. Sin duda, numerosos centros universitarios, sus estudiantes y buena parte de su personal docente, contribuirían a tal esfuerzo.

Proponemos abrir a esa contribución las empresas y fábricas del Area Social, para que allí concurren profesores y estudiantes, bajo un programa central claramente diseñado, a apoyar esa capacitación masiva de trabajadores.

Además, comenzaremos así a borrar las fronteras que la burguesía

ha cuidado de establecer y mantener entre teoría y práctica, entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales.

POLITICA ECONOMICA, POLITICA DE MASAS

Ninguna tarea de la política económica, ninguna medida propuesta, para conjurar la situación existente, podrá ser llevada a cabo sin transformarla en una tarea de masas; sin apoyarse resueltamente en los trabajadores y en el pueblo.

Entendemos que el desarrollo del movimiento popular es común al Gobierno y el pueblo. Por lo tanto, es correcto —y además, necesario— que el propio pueblo se haga cargo de realizar las tareas del Gobierno.

En consecuencia, el pueblo tiene el derecho y el deber de exigir el cumplimiento de las tareas de contenido socialista planteadas en el Programa Básico de Gobierno; las tareas destinadas a derrotar definitivamente las maniobras de los enemigos del proceso revolucionario; las tareas que impone la lucha por el poder.

Pero esto no significa que los trabajadores y el pueblo, sus organizaciones de clase, la movilización de masas, deban ser consideradas como simples fuerzas auxiliares para el cumplimiento de tal o cual medida de Gobierno.

Se trata de que la Unidad Popular y el Gobierno sitúen en el centro de su atención, en cada iniciativa y cada acción, el desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular, y la instauración de “un nuevo Estado, donde los trabajadores y el pueblo tengan el ejercicio real del poder”, como lo señala textualmente el Programa de la Unidad Popular.

En los hechos, los trabajadores han avanzado en esa perspectiva más que cualquier declaración de las direcciones políticas.

Ante cada embestida reaccionaria, el pueblo ha replicado fortaleciendo y acerando cada vez más sus organizaciones de Poder Popular.

Es hora de dar a este Poder Popular, toda la proyección política y revolucionaria que encierra. Los Comandos Comunales pueden y deben convertirse ahora en una realidad generalizada. Los Comandos Comunales pueden y deben ser reconocidos como una instancia de Poder Local, generado democráticamente por todas las organizaciones de base y con funciones y atribuciones definidas sobre los problemas locales de abastecimiento, transporte, salud, vigilancia y cada una de las actitudes específicas de toda comuna.

Sólo un Poder Popular así generado y proyectado permitirá llevar a cabo las tareas que impone la situación actual y futura.

Para imponer este Poder Popular, llamamos a todos los trabajadores, sin distinción de ideologías, al diálogo y a la lucha en la base misma de la sociedad.

La burguesía teme ese germen de Poder Proletario, nacido al calor

del proceso revolucionario. Ese temor es el que ha llevado a los reaccionarios a montar una histérica campaña de denuncias sobre supuestos arsenales de armas en fábricas e industrias. Pero no son armas físicas lo que buscan a través de los allanamientos practicados por las Fuerzas Armadas. Lo que busca la burguesía es amedrentar a la clase obrera y aplastar sus organizaciones de clase, intentando así estrangular al naciente Poder Popular.

Grande e histórica es la responsabilidad que la Patria entrega al pueblo chileno, especialmente a los trabajadores de la ciudad y del campo.

Tenemos una profunda fe en la clase obrera y campesina. Ellos saben que, junto a su Gobierno, son los protagonistas de este proceso.

Sin embargo, más que esos cambios y realizaciones concretas, su verdadera trascendencia está en haber desatado una tempestad de fuerzas sociales, políticas e ideológicas, sin parangón.

Fuerzas que han impactado indeleblemente la vieja estructura institucional, en apariencias intacta, pero irremediablemente quebrada en sus cimientos.

Fuerzas incontenibles que nadie podrá ignorar, reprimir o aplastar en el futuro.

Fuerzas irreversibles encarnadas en el alma de nuestro pueblo, en la conciencia de los trabajadores, en el ser íntimo de la nacionalidad.

Al conjuro de esa potencialidad en ebullición, ha nacido en el trabajador una nueva concepción de la dignidad, una nueva escala de valores, una nueva perspectiva histórica. Consignas como: “Soy obrero, mando yo”, “Crear, crear, Poder Popular”, no sólo reflejan un estado de ánimo y una disposición para el combate, sino también una conciencia revolucionaria imposible de detener mediante consolidaciones prematuras, transacciones de salones, ni siquiera bajo el imperio de la metralla de un fascismo eventualmente erigido en dictadura.

Toda esa erupción social tiene una importancia tan grandiosa que sus propias vanguardias políticas, en mayor o menor grado, somos incapaces de evaluar en toda su dimensión histórica.

Hemos despertado a un pueblo y lo hemos echado a andar, y “nada ni nadie podrá detener su marcha de gigante”.

A su paso, palidece todo cuanto pretende entorpecerlo o frustrarlo.

Las mezquinas rencillas politiqueras; la pertinaz y demagógica obstrucción del Parlamento; las arbitrariedades del Poder Judicial; los promotores de la sedición y de la guerra civil; los lamentables desaciertos económicos del Gobierno; la indisciplina e irresponsabilidad en algunas capas de trabajadores; ciertas acciones espontaneístas y voluntarias de la masa; la excesiva impaciencia o indolencia de algunos; la corrupción de algunos interventores, funcionarios y dirigentes de la Unidad Popular, todo ello, pese a su gravedad, todo ello —repetimos—

son materias accesorias y secundarias frente a la grandeza y magnitud de este torrente social y en nada lo perturban y menoscaban.

Conservadores y reformistas visualizan como anarquía y desorden lo que es en realidad la expresión dinámica del nuevo reordenamiento de la sociedad, la efervescencia de los cambios introducidos, y la irrupción de una nueva clase social —la clase obrera— en todos los niveles dirigentes de un país en transformación.

Conservadores y reformistas no son capaces de vislumbrar este Chile nuevo que surge, como en todas las revoluciones, por encima de una situación —inquietante pero transitoria— de inseguridad y desconcierto, apenas instantes fugaces —acaso inevitables y necesarios— en la hora histórica que estamos viviendo a partir de 1970.